

La reacción airada, el desvergonzado chantaje con el que los santones de la Unión Europea han amenazado a Islandia, tras el resultado del referéndum por el que los islandeses se niegan a indemnizar a los gobiernos de Holanda y Gran Bretaña por la quiebra del banco *online* Icesave, revela bien a las claras dónde reside el poder real en estos tiempos globalizados. Se trata de un poder extraparlamentario, al que parlamentos y gobiernos se subordinan: el poder financiero. Ante la decisión democrática, mayoritaria, del pueblo islandés, la UE, por boca entre otros de su comisario Almunia, ha subrayado que, si Islandia no paga, va a tener difícil que sea aceptada su solicitud de ingreso en la Unión Europea. Así de claro.

El origen del asunto se encuentra probablemente en la decisión del gobierno islandés de privatizar la banca. Una decisión que se tomó allá por 1999 y que se culminó en 2003 con la privatización de los tres bancos más importantes: Kaupthing, Glitnir y Landsbanki-Icesave. Mucho banco para un país que tiene sólo 320.000 habitantes.

La búsqueda de la maximización del beneficio empujó a la banca islandesa a actuar fuera del país, ofreciendo altos intereses para captar el dinero especulativo de clientes extranjeros, los cuales estaban obviamente encantados. Icesave, por ejemplo, tenía 400.000 depositantes en Holanda y Gran Bretaña, ¡más clientes extranjeros que ciudadanos islandeses!

La crisis se llevó por delante a la banca islandesa, que fue nacionalizada en 2008, haciéndose así cargo el Estado del agujero dejado por una mala gestión bancaria dirigida netamente a la especulación. La factura, por tanto, acababa pagándola la ciudadanía islandesa.

Sin embargo, el gobierno islandés no nacionalizó la filial *online* del Landbanski, Icesave, cuyo agujero era de 3.800 millones de euros, al considerar que no operaba en su territorio. Los gobiernos holandés y británico garantizaron sus saldos a los “inversores”, pero luego exigieron al gobierno islandés la restitución de esos 3.800 millones. En una población tan reducida como la islandesa, para pagar esa cantidad cada ciudadano debería contribuir con 100 euros mensuales durante ocho años, nada menos.

Y los ciudadanos se han negado. En contra de la opinión de la primera ministra, el presidente del país atendió la petición de 40.000 ciudadanos que exigían un referéndum. Y en el referéndum, el 60% dijeron no.

Pero claro, quien manda, manda. El poder financiero había conseguido que los gobiernos holandés y británico soltaran la pasta, y ahora o paga el ciudadano islandés, o lo hacen los ciudadanos holandeses y británicos. Y los bancos, de rositas, esperando los tiburones de siempre que, cuando las cosas mejoren, los privaticen de nuevo.

Y la UE, el FMI y la banca internacional lo ha dejado claro: Islandia ha de pagar. Y si no, que se atenga a las consecuencias. Vote lo que vote.

A esto lo llaman democracia.

Miguel Riera